



América Latina Hoy

ISSN: 1130-2887

latinohoy@usal.es

Universidad de Salamanca

España

García-Guadilla, María Pilar

Organizaciones sociales y conflictos sociopolíticos en una sociedad polarizada: las dos caras de la  
democracia participativa en Venezuela

América Latina Hoy, vol. 42, abril, 2006, pp. 37-60

Universidad de Salamanca

Salamanca, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30804203>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en [redalyc.org](http://redalyc.org)

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## ORGANIZACIONES SOCIALES Y CONFLICTOS SOCIOPOLÍTICOS EN UNA SOCIEDAD POLARIZADA: LAS DOS CARAS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN VENEZUELA

*Social organizations and socio-political conflicts in a polarized society:  
the two faces of participatory democracy in Venezuela*

María Pilar GARCÍA-GUADILLA

Universidad Simón Bolívar

✉ mpgarcia@usb.ve

BIBLID [1130-2887 (2006) 42, 37-60]

Fecha de recepción: febrero del 2006

Fecha de aceptación y versión final: marzo del 2006

**RESUMEN:** Los analistas y estudiosos de la sociedad civil organizada han tendido a identificarla con los valores positivos de la pluralidad, tolerancia, civildad y democracia. Sin embargo, un análisis de los procesos de polarización sociopolítica existentes en Venezuela indica que dentro de la heterogeneidad ideológica, política, cultural y de clases sociales que la caracterizan pueden desarrollarse tanto proyectos democráticos como proyectos e imaginarios profundamente excluyentes. El objetivo de este trabajo es analizar las consecuencias de ambas facetas, en los imaginarios y las representaciones sociales de exclusión del «otro», en el espacio y la geotificación de la ciudad de Caracas y en el origen de la violencia urbana y de la violencia inter-clases sociales en un país, donde paradójicamente, se ha institucionalizado la democracia participativa.

**Palabras clave:** polarización sociopolítica, sociedad civil organizada, democracia participativa, violencia urbana, prácticas antidemocráticas.

**ABSTRACT:** Scholars and researchers have identified organized civil society with positive values such as plurality, tolerance, civility and democracy. Nonetheless, an analysis of current processes of sociopolitical polarization in Venezuela shows that within the ideological, political, cultural and social classes heterogeneity that characterize organized civil society might develop democratic projects as well as imaginaries, representations and non-democratic projects. The

purpose of this paper is to analyze the effects of these two faces in the exclusion of the «other», on the space and the gentrification of the capital city of Caracas, on urban violence and on inter-class violence in a country that, paradoxically, has institutionalized participatory democracy.

*Key words:* socio-political polarization, organized civil society, participatory democracy, urban violence, non-democratic praxis.

## I. SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA: ¿DEMOCRÁTICA, PLURALISTA Y POLICLASISTA?

La tradición teórica neoconservadora y liberal ha contrapuesto a la sociedad civil con el Estado considerándolos como entes autónomos e identificando a la sociedad civil como el sujeto por excelencia de la participación ciudadana (Cunil Grau, 1991)<sup>1</sup> y como portadora de valores éticos que están por encima del Estado. Se considera a la participación ciudadana como un espacio político autónomo que sirve para el fortalecimiento de la propia sociedad y para la transformación del Estado a través de la democratización de la sociedad política. De acuerdo con estas premisas, la relación con el Estado de la sociedad civil venezolana se caracterizaría por ser democrática, afirmación que se fundamenta en su búsqueda de formas «más participativas» de democracia y por no emplear la violencia plegándose a lo sumo a la desobediencia civil. También se caracterizaría por ser pluralista en valores, policasista por las clases sociales que la conforman y portadora de intereses sociales, difusos y colectivos, comunes a toda la sociedad civil sin distingo de clase social u otra categoría.

Sin embargo, la caracterización anterior que resalta el potencial democratizador de la sociedad civil, se ha quedado corta a la hora de explicar las praxis del sujeto sociedad civil en sociedades con una alta polarización política y con elevados niveles de pobreza y de desigualdad social como lo es Venezuela. De hecho, no han sido capaces de interpretar críticamente prácticas tales como la cooptación y pérdida de autonomía, la promoción de valores específicos y de clase y el desarrollo de imaginarios, estrategias y prácticas de exclusión del «otro», las cuales se vinculan con la elevada polarización económica, política, social e ideológica que existe. Por otro lado, tales prácticas han acentuado la conflictividad sociopolítica entre el Estado y la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos de la sociedad civil venezolana desde la Constitución de 1961 hasta el Proceso Constituyente de 1999 fue la emergencia de organizaciones y movimientos sociales<sup>2</sup> que enriquecieron el escenario sociopolítico con nuevas identidades, concepciones de ciudadanía y proyectos de sociedad democráticos. En

1. La participación ciudadana se entiende como la intervención de los individuos en actividades públicas para defender «intereses sociales» o intereses particulares de la sociedad civil que no se integran en el sistema tradicional de mediación y articulación política.

2. El término «organización social ciudadana» alude a aquellas organizaciones que se movilizan activamente y utilizan la participación ciudadana, tal como fue definida previamente, en defensa de sus intereses sociales. Estas organizaciones sociales encarnan a muchos de los movimientos sociales del pasado; en particular al movimiento urbano o ciudadano.

la década de 1980, estas organizaciones y movimientos sociales que denominaremos «sociedad civil organizada»<sup>3</sup> ganaron legitimidad en la esfera pública proponiendo nuevos modos de interrelación con el Estado y convirtiéndose en actores e interlocutores del proceso de descentralización política el cual tenía, entre otros objetivos, la democratización de la democracia. A fines de la década de 1990, la sociedad civil organizada logró incorporar sus demandas estratégicas<sup>4</sup> y proyectos de sociedad en la Constitución Bolivariana mediante su participación activa en el Proceso Constituyente que institucionalizó la denominada «democracia participativa» incorporando mecanismos de participación que trascienden la democracia representativa y que se encuentran más anclados en las organizaciones sociales que en los partidos políticos tradicionales. De esta forma, la sociedad civil se transformó de actor social en actor socio-político<sup>5</sup> y en interlocutora legítima y directa del Estado sin pasar por la mediación de los partidos políticos.

Bajo el marco de la Constitución Bolivariana de 1999, las luchas por la democracia participativa desde el año 2000 al 2005, no sólo enfrentaron a un sector de la sociedad civil organizada (el sector opositor políticamente al presidente Chávez) con el gobierno sino que también se confrontaron los dos sectores en que se dividió la sociedad civil organizada con el advenimiento de Hugo Chávez a la presidencia de la República. Ello se debió en parte a la falta de una definición precisa y operativa sobre la democracia «participativa y protagónica», a las diferencias en valores y proyectos de sociedad que cada sector sustenta, y a las diferencias socioeconómicas y de clase que existen entre los dos sectores. Como se analizará a lo largo de este trabajo, los comportamientos desplegados en los conflictos en los que estos dos sectores de la sociedad civil han participado apuntan hacia prácticas de exclusión y negación del «otro» y no necesariamente hacia la tolerancia, el pluralismo y la capacidad de construir intereses difusos y colectivos comunes destacados en el modelo teórico (Ellner, 1999; García-Guadilla, 2005, 2005a; Lander, 1985).

Pero, ¿cómo se llegó a estas prácticas?, pues mucho se ha elaborado acerca del papel democrático de las organizaciones sociales ciudadanas y muy poco sobre esta segunda faceta. Es por ello que otro de los objetivos de este trabajo es el de develar las

3. La noción empírica de sociedad organizada que se utiliza en este trabajo incluye tanto a las asociaciones y organizaciones políticas, término usado en la Constitución de 1999 para referirse a los partidos políticos como a las organizaciones sociales. Los términos «sociedad organizada, sociedad civil, organizaciones de la sociedad, organizaciones sociales, organizaciones populares y organizaciones comunitarias» aparecen en el Texto Constitucional de 1999, de forma intercambiable como referentes del sujeto sociedad civil. Por ello, de manera empírica y dentro de la perspectiva que orienta el trabajo, se usarán indistintamente los términos sociedad civil, movimientos y organizaciones sociales a pesar de estar conscientes de las diferencias conceptuales y sobre todo del hecho de que no toda la «sociedad civil» puede encajar en las categorías de movimiento y organización social.

4. Entendemos por demandas estratégicas aquellas que tienen que ver con el núcleo de las identidades; es decir, con los derechos y valores fundamentales.

5. A diferencia del actor social, el actor sociopolítico reivindica el espacio político como un espacio legítimo para influir en el proceso de toma de decisiones.

prácticas antidemocráticas «de exclusión y negación del otro» que pueden surgir de los actores sociales. El análisis se torna relevante al constatar que quienes realizan estas prácticas antidemocráticas son los mismos actores que también se movilizan alrededor de prácticas democráticas y que en el pasado se movilizaron democráticamente para que el espacio político se abriera y albergara sus demandas. Ello lleva a especular acerca del papel, democrático o no, que las organizaciones sociales pudieran tener en el futuro escenario político venezolano.

## II. RUPTURA DE LA DEMOCRACIA «VITRINA» Y EMERGENCIA DE LOS CONFLICTOS DE CLASE

Una de las hipótesis que los politólogos han manejado es que la democracia «vitrina» que Venezuela inauguró en 1958 con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez se resintió o inviabilizó con la aguda crisis económica social y política de las últimas dos décadas. Adicionalmente, la tesis que defenderemos en este trabajo es que estas crisis hicieron manifiesta la incapacidad de la democracia representativa para lidiar con los problemas de las desigualdades étnicas, de género y sobre todo socioeconómicas. Además, las crisis presionaron por la apertura del sistema político de forma de incorporar las demandas de la población por la profundización de la democracia mediante una mayor participación y, dados los altos índices de pobreza y desigualdad existentes, estas demandas también fueron por una mayor equidad social. Como consecuencia de lo anterior, las diferencias de clase tendieron a transformarse en diferencias políticas e hicieron que la demarcación entre los actores sociales, económicos y políticos fuera cada vez más tenue y que frecuentemente los diferentes actores traspasasen sus líneas identitarias. Además, los conflictos de carácter político se impregnaron con contenidos de clase derivando en conflictos sociopolíticos polarizados donde se enfrentaron las clases sociales por lo que la solución de los conflictos dentro del marco democrático se hizo más difícil.

La crisis económica de los ochenta contribuyó a activar la grave crisis política que tuvo una de las expresiones más relevantes en 1989 con el Caracazo e hizo aflorar con fuerza dichas contradicciones y diferencias. Dicha crisis fue también el escenario donde se activaron nuevas organizaciones y movimientos sociales que según muchos autores han jugado un papel democratizador a largo de los últimos treinta años (García-Guadilla, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2005a; Gómez Calcaño, 1987, 1997).

Por otro lado, la Constitución de 1999 incluyó los derechos de muchos de los actores excluidos del Pacto de Punto Fijo tales como los indígenas, los pobres, las mujeres y los extranjeros nacionalizados entre otros y reconoció de manera fehaciente que todos los ciudadanos/as sin distinción de clase, raza, religión o género tienen los mismos derechos. Más aún, fueron estos actores, originalmente excluidos de los pactos políticos con el Estado, quienes mayormente presionaron al sistema político para que éste se democratizara más allá de la práctica electoral e incluyera sus demandas y derechos.

A pesar del reconocimiento constitucional de los nuevos derechos y de los actores y organizaciones que los propiciaron, es preciso destacar las dificultades crecientes que existen para resolver los conflictos Estado-Mercado-Sociedad que han surgido dentro del nuevo marco constitucional.

Una de las razones que serán exploradas en este trabajo es que dadas las deficiencias en la cultura política democrática del venezolano, el nuevo marco constitucional no ha podido contrarrestar las percepciones sobre «el otro» e incluso las autopercepciones que derivan de las diferencias socioeconómicas o de clase y que dentro de un escenario de grandes desigualdades sociales, parecen haber aflorado con mayor intensidad. Esta hipótesis no descalifica el papel que haya podido jugar el «encendido y polarizado» discurso presidencial en la intensificación de los conflictos de clase al equiparar diferencias sociales con división política. En la medida que los niveles de pobreza y desigualdad se han acentuado, la democracia en Venezuela, al igual que en otros países de la región, no ha podido evitar que las diferencias de clase se transformaran en lucha de clases y tendieran a equiparse con diferencias político-ideológicas. La acentuación de la polarización social y económica tampoco ha podido evitar el surgimiento de la polarización política e ideológica.

Dado que en Venezuela las tensiones democracia-antidemocracia provienen tanto del Estado como de la sociedad organizada, del resultado de esta interacción, o de la forma democrática o no como se manejen las percepciones, los conflictos y las tensiones entre ambas partes, dependerá la consolidación o no de la democracia en Venezuela.

### III. ORGANIZACIONES SOCIALES Y CONFLICTOS SOCIPOLÍTICOS: ¿DOS CARAS FRENTE A LA DEMOCRACIA?

A lo largo del decenio 1989-1999, las movilizaciones y luchas de los movimientos y organizaciones sociales para que los derechos que demandaban se incluyeran en la nueva Constitución y, una vez incluidos, se reconocieran como la base de su interrelación con el Estado, fueron ejemplarmente democráticas y contribuyeron al fortalecimiento de la democracia<sup>6</sup> (García-Guadilla y Roa, 1996; García-Guadilla, 2002, 2005a). Sin embargo, la inclusión de estos derechos no garantizó que el Estado y la sociedad tuvieran la misma interpretación del texto constitucional a la hora de un conflicto entre ambos. Es por ello que la defensa por los derechos constitucionales sancionados movilizó a amplios sectores de la población durante el bienio 2000-2002, independientemente de su nivel socioeconómico y tendencia política<sup>7</sup>.

6. El presente análisis se basa en: a) la revisión exhaustiva del material hemerográfico correspondiente; b) el análisis de contenido de los documentos de las organizaciones sociales; c) los resultados de las entrevistas a las organizaciones sociales y d) los testimonios aportados sobre las experiencias o estudios de caso del 23 de enero y el 2 de febrero del 2003.

7. Ambos sectores, los adeptos a Chávez y quienes se oponen, tienden a utilizar el marco constitucional como legitimación de sus demandas y movilizaciones.

Entre los sectores más movilizados se encuentra la «oposición política» la cual puede definirse como una categoría sumamente amplia, heterogénea ideológicamente y diversa en sus identidades e intereses que alberga a todos los descontentos con el presidente Chávez. Además de las organizaciones sociales que se oponen a Chávez, incluye a las amas de casa predominantemente de las clases media y alta, gran parte de los jóvenes de clase media y/o alta, a los partidos políticos de la oposición con ideologías diversas, sean éstos tradicionales o nuevos, y a las organizaciones corporativistas como la Federación de Industriales y Comerciantes (Fedecámaras) y la Central de Trabajadores de Venezuela (CYV)<sup>8</sup>.

En el año 2001, la oposición como actor político tendió a identificarse con la Coordinadora Democrática de Acción Cívica (CACIV) cuyo documento constitutivo data de enero del 2001 y su presentación ante los medios fue el 15 de marzo del 2001. La Coordinadora Democrática se autodefinió como «un movimiento democrático y pluralista, destinado a canalizar esfuerzos de diversos grupos e individualidades de la sociedad civil, respetando la autonomía y la independencia de cada uno, con la finalidad de defender el sistema democrático, el Estado de derecho, las libertades individuales y la estabilidad institucional». Mas aún, aspiraba a convertirse «en un punto de apoyo para la oposición democrática, y en una referencia válida, sólida y coherente con credibilidad y alcance dentro del entorno político nacional e internacional y actuar como ente vigilante del Estado, sin pretender convertirse en un partido político ni en plataforma electoral. CACIV activará sus mecanismos de acción cada vez que la estabilidad democrática sea amenazada por prácticas de carácter totalitario»<sup>9</sup>.

Según la dirigencia del Bloque Democrático<sup>10</sup>, organización que para entonces formaba parte del CACIV y que criticó las decisiones y estrategias utilizadas por la Coordinadora con motivo del paro cívico que duró dos meses (del 2/12/2002 al 2/2/2003), la Coordinadora debía estar compuesta por todos los sectores de la oposición, los cuales eran al menos los siguientes cuatro: a) los partidos políticos, nuevos y tradicionales, «con comprobada trayectoria ciudadana»; b) instituciones de la sociedad, como los medios de comunicación, la CTV, Fedecámaras, el sector petrolero, los marinos

8. Entre los partidos políticos se encuentra Acción Democrática, Copei, La Causa R, Primero es Justicia e incluso, partidos que en el pasado estuvieron contra la democracia como Bandera Roja. A pesar de la heterogeneidad que también existe entre las organizaciones sociales de la oposición, es preciso destacar que a juzgar por la defensa de la democracia «liberal» que hacen la mayoría de estas organizaciones, su heterogeneidad ideológica resulta menor que en los partidos políticos.

9. Ver [http://www.geocities.com/caciv\\_ve/](http://www.geocities.com/caciv_ve/). La CACIV es sumamente heterogénea ideológicamente y el único consenso explicitado ha sido «salir de Chávez». Entre los veintiún miembros fundadores, es decir, las instituciones o las personas jurídicas afiliadas, se encuentran el Foro Democrático, el Frente Institucional, Frente Ezequiel Zamora y el Comité de Resistencia Civil, fundaciones y organizaciones como La Fundación Democracia y Libertad Venezolana-Americana, el Movimiento Vecinal Con La Vida Democrática, la Junta Patriótica, Pro Catia, Visión Emergente e incluso el Partido Popular Independiente y el Movimiento de Integridad Nacional (MIN).

10. Ver <http://www.elnacional.com>.

mercantes y los militares disidentes; c) una cuota de las gobernaciones y las alcaldías y d) las organizaciones no gubernamentales de «verdadera esencia».

Es preciso destacar que de acuerdo con la clasificación anterior, las organizaciones sociales o no gubernamentales constituían apenas uno de los componentes de la alianza contra Chávez. Además, dado el orden en que aparecían en la definición de oposición política (de último), su poca visibilidad mediática a lo largo del paro cívico y el hecho de que los partidos políticos y sobre todo las denominadas «instituciones» como la CTV, Fedecámaras y el sector petrolero, hubieran copado el liderazgo y el espacio político de la Coordinadora, dejó a estas organizaciones prácticamente al margen de la Mesa de Negociación y Acuerdos que se creó para resolver los conflictos entre el Estado y la oposición. Sin embargo, a juzgar por las intensas movilizaciones ciudadanas y otras acciones de impacto que se dieron como la recolección de firmas para el referéndum consultivo y el revocatorio, dichas organizaciones jugaron un papel protagonista en estos conflictos.

Dada la definición constitucional de la democracia venezolana como «participativa y protagónica», una de las razones que ocasionó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición fue el derecho a participar en la elaboración del marco legal o leyes orgánicas que debían desprenderse de la Constitución. El conflicto se inició con la aprobación mediante decreto presidencial del paquete de leyes «habilitante» lo cual frustró la expectativa creada por la Constitución de 1999 de que dichas leyes se aprobarían por vía de la democracia participativa; además, se nutrió con la aprobación de políticas y otras medidas que, en opinión de la oposición, le perjudicaban ampliamente.

Entre las propuestas que respaldó la oposición para salir de la grave crisis política que originó tal aprobación estuvo el llamado a activar las figuras de la democracia participativa presentes en la Constitución de 1999 tales como los Referéndum Consultivo y Revocatorio, la enmienda constitucional y un nuevo proceso constituyente. Después del fracaso de la huelga convocada por la oposición que duró de diciembre de 2002 a febrero de 2003, la organización ciudadana SUMATE<sup>11</sup> activó la campaña para la recolección de las firmas por el referéndum contra el presidente Chávez cuya expresión más relevante tuvo lugar con motivo del «Firmazo» del 2 de febrero del 2003 donde se recogieron cuatro millones y medio de firmas lo que representó el 37,5% de los doce millones de votantes<sup>12</sup>. Este proceso de recolección de firmas así como el de mayo de 2003 cuando se recogieron firmas para el Referéndum Revocatorio contra el presidente y el proceso previo de recolección de más de dos millones y medio de firmas (más del 10% que requiere la Constitución) por parte de las organizaciones sociales ciudadanas (Queremos Elegir y Primero Justicia, entre otras) y su entrega el 4 de noviembre del 2002 al Consejo Nacional Electoral (CNE) para activar el Referéndum

11. SUMATE fue fundada a fines del 2002 y se autodefine como una cooperativa de investigadores y abogados, que se encarga «de concentrar, codificar, organizar y transcribir las firmas captadas por la oposición».

12. Este 37,5% está por encima del 20% que requiere la Constitución para convocar al Referéndum Revocatorio.

Consultivo, constituyen ejemplos de la cara democrática y propositiva de las movilizaciones ciudadanas de la oposición. Es preciso destacar que, a pesar de su desdibujoamiento al interior de la CACIV, en ambos casos, el liderazgo y la organización de estos procesos estuvieron en manos de las organizaciones sociales y que estos procesos contribuyeron a robustecer la cultura política democrática. Otro ejemplo de la cara democrática de las organizaciones sociales de la oposición fue la forma en que llevaron el proceso para el Referéndum Revocatorio contra el presidente Chávez ocurrido en agosto del 2004.

Contrastando con lo anterior, en la defensa de los nuevos derechos constitucionales, las organizaciones sociales (electorales, vecinales y de mujeres, por ejemplo), los partidos políticos y, en general, la oposición han mostrado una faceta menos democrática. Esta cara antidemocrática de la oposición se manifestó en algunas de las estrategias utilizadas para defender derechos paradójicamente «democráticos» tales como la propiedad privada, los cuales se consideraban amenazados. Dichas prácticas, que develan la deficiente cultura política democrática del venezolano, se basaron en el miedo al «otro», considerado «el enemigo», y por tanto en su exclusión del campo de la negociación política. Un ejemplo de prácticas antidemocráticas lo constituye la instrumentación de los «Planes de Contingencia» del 23 de enero del 2003 que tenían el supuesto objetivo de defenderse frente a «las hordas chavistas». En esta oportunidad, el lenguaje peyorativo y el imaginario de la oposición estuvieron alimentados por los constantes rumores y llamados de los medios de comunicación privados reiterando que «los círculos bolivarianos» atacarían violentamente el sagrado recinto de la propiedad privada de la clase media<sup>13</sup>.

Esta segunda cara antidemocrática puede aplicarse tanto a la oposición como a los adeptos a Chávez. Se manifiesta en lo que Túlio Hernández al hablar de la «gramática de guerra» que priva en Caracas, ha denominado el secuestro de los lugares públicos de la ciudad por un grupo político, ya sea del gobierno o de la oposición<sup>14</sup>.

#### IV. CIUDADANÍAS DEL MIEDO, IMAGINARIOS DE CLASE Y POLARIZACIÓN SOCIAL

Muchas de las prácticas antidemocráticas, de intolerancia y excluyentes llevadas a cabo por la oposición en general y, de forma específica, por las organizaciones sociales se fundamentan en imaginarios sociales que se encuentran reforzados por la elevada polarización social resultante de los altos índices de pobreza así como también por la polarización política frente al gobierno del presidente Chávez. Estos imaginarios sirven de justificación a las acciones de exclusión espacial y social del «otro». Por tanto, un cuarto objetivo de este trabajo es analizar los efectos espaciales, sociales y políticos de estos imaginarios y de la creciente polarización sociopolítica de la sociedad venezolana en la última década.

13. Para una breve descripción de los Círculos Bolivarianos ver P. GARCÍA-GUADILLA (2003).

14. En *El Nacional*, 9/3/2003, p. A/13.

Aun cuando los hechos que a continuación se relatan tengan similitud con algunas de las crónicas de las ciudades sitiadas de la Edad Media, de los guetos judíos de la Segunda Guerra Mundial o del desaparecido, al menos legalmente, gueto sudafricano, estos hechos forman parte de la cotidianidad de la ciudad capital de Caracas donde, desde fines de los años ochenta, la protesta política y la lucha por la democracia se han territorializado o expresado en los espacios públicos y privados, más que en las urnas o la vía electoral. En Caracas, las diferencias políticas y sociales, el miedo, el desánimo y la frustración política han estimulado el secuestro de los espacios públicos de la ciudad además de fuertes procesos de segregación espacial y de polarización social; en suma, la des-democratización de la ciudad.

Es a través de estos procesos des-democratizadores donde se expresa la faceta antidemocrática de organizaciones sociales como las asociaciones ciudadanas de clase media que en el pasado hegemonizaron la lucha por la democracia participativa. Al sentirse amenazadas por el enemigo, el «otro», estas organizaciones sociales priorizaron sus intereses de clase en las respuestas dadas a la crisis y utilizaron estrategias cuasimilitares para defender los espacios privados del hogar o residencia familiar, el edificio o condominio y la urbanización en que habitan; en sus palabras, «defender la familia, la propiedad y la democracia» así fuera mediante planes y estrategias violentas, excluyentes y antidemocráticas. Para ello, se apoyaron en organizaciones preexistentes como el condominio de vecinos a nivel de edificación o las asociaciones de vecinos a nivel de la urbanización, ambas figuras sancionadas en el Reglamento de Participación Ciudadana de la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1989.

Se hará este análisis tal como lo recomienda Michel De Certeau (1984), acercándose al espacio de la ciudad de Caracas como el escenario donde interactúan nuestros personajes. Estos están tipificados por un lado, por el Estado<sup>15</sup> representado por el presidente Chávez dado el alto personalismo existente y, por el otro, por las organizaciones sociales de la oposición que han sido identificadas de forma estereotipada por los medios de comunicación adversos a Chávez, con el eje de «la sociedad civil» en esta contienda.

En febrero de 1989, la protesta política en la ciudad de Caracas contra las medidas de ajuste estructural adoptadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, dio curso a una explosión social de grandes dimensiones denominada «Caracazo» (García-Guadilla, 1991). Este evento marca el inicio del miedo al «otro»; cuyo referente es el pobre o las «turbas desorganizadas» como las llamaron los medios de comunicación, que en esa oportunidad «bajaron los cerros» donde habitan para satisfacer su hambre de comida y de los artículos de consumo suntuario que les estaban negados, atemorizando

15. Es preciso destacar que las organizaciones sociales chavistas identificadas con los Circulos Bolivarianos forman parte también de los conflictos; se identifican con el Estado, concretamente con el presidente Chávez; y están en permanente confrontación con la oposición. A pesar de su papel, dada su complejidad y la naturaleza de este trabajo, sólo serán analizadas en la medida en que sus comportamientos y acciones generen una respuesta de parte de los grupos opositores a Chávez.

con esta conducta a la clase media<sup>16</sup>. Según las encuestas de opinión pública realizadas recientemente, el imaginario social venezolano de la clase media y alta representa al pobre como «un criminal y un delincuente» y a los Círculos Bolivarianos que supuestamente agrupan a los adeptos al presidente Chávez como «violentos y terroristas»<sup>17</sup>. A su vez, el pobre percibe a la clase media y alta también como «delincuente, corrupta y explotadora»; en sus propias palabras, la clase media y alta son los «escuálidos oligarcas». En el artículo periodístico «Polarización forzará fin de la crisis»<sup>18</sup>, Andy Webb-Vidal destaca la respuesta dada por una persona que opera una estación de radio afecta al gobierno de Chávez quien señala: «Los de Altamira nos describen como agresivos y peligrosos, pero no quieren escucharnos. Nos ven como una amenaza, pero es lo contrario» (pp. 1-9). Webb-Vidal destaca también que, según los resultados de las encuestas realizadas por los medios de comunicación, existen espacios percibidos como impenetrables según la clase social que son la consecuencia de visiones polarizadas de los espacios de la ciudad. Pone como ejemplo el caso de una joven bien vestida graduada en una universidad nacional que se encontraba sentada en un banco de la Plaza Altamira y al ser entrevistada dice no atreverse a ir a buscar su título a la oficina que se encuentra en territorio chavista por «tener miedo de ir al centro de Caracas. Ahora una siente que tiene que disfrazarse con ropas andrajosas» (pp. 1-9).

Tal como se ha señalado, estos imaginarios sociales, que están reforzados por la elevada polarización política frente al gobierno del presidente Chávez, sirven de justificación a la exclusión y a la violencia. Por tanto, la violencia, sea ésta real o percibida, produce crisis o rupturas en los planos personales, familiares y sociales y tiende a deslindar el discurso de la praxis para enfrentarla. Tal como lo señala Rotker (2000), «Los individuos buscan sus propias articulaciones, repitiendo una y otra vez sus relatos personales, acaso al modo de exorcismo de una experiencia traumática, acaso al modo de explicar un panorama político y económico cuya complejidad sólo es aprehensible ahora a partir del pequeño cuento de una persona a otra...» (p. 9). Adicionalmente, ante la percepción de la violencia, los órdenes físicos y los órdenes de significados se entremezclan y la lógica y la moral se tergiversan adquiriendo una racionalidad propia que nada tiene que ver con las categorías éticas que sustentan los individuos, la familia y el grupo social.

16. En esta ocasión y a pesar de que la mayoría de los bienes saqueados durante el Caracazo pertenecían a la clase alta y media, los pobres del cerro no se enfrentaron directamente con la clase media y alta. El enfrentamiento fue con los policías y Guardia Nacional que después de dos días de saqueo y un Toque de Queda decretado por el gobierno, salió a reprimir estas manifestaciones violentamente.

17. Si bien la percepción de la oposición acerca de los pobres es que éstos están organizados alrededor de los denominados Círculos Bolivarianos y que están armados, es preciso destacar su pluralidad y/o heterogeneidad. Quizás el único rasgo común sea su procedencia o base popular y/o vecinal ya que algunos círculos son de carácter democrático mientras que otros son autoritarios y están fuertemente controlados por sus líderes; algunos, los de carácter vecinal y local, tienden a ser pacíficos y a orientarse hacia la resolución de la problemática cotidiana de la sobrevivencia; otros propugnan la violencia y son de carácter armado.

18. En *El Universal*, domingo 22 de diciembre del 2002, pp. 1-9.

## V. TERRITORIALIDAD POLÍTICA Y GEOGRAFÍA DE GUERRA: FEUDOS Y GUETOS URBANOS

En Caracas, las luchas por la democracia y más concretamente, por la denominada democracia participativa<sup>19</sup>, además de polarizarse socialmente, se han «espacializado» expresándose de forma dinámica tanto en los ámbitos privados de la residencia u hogar familiar como en los ámbitos públicos de la calle, plaza o autopista de las ciudades. Las consecuencias han sido la creación de feudos y guetos urbanos en la ciudad que responden a las diferencias sociales y políticas, la territorialización de los conflictos políticos, la aparición de espacios altamente segregados, la pérdida de libertad para desplazarse en la ciudad dado el alto riesgo de ser identificado con el «otro», el creciente deterioro de los servicios y calidad de vida de los ciudadanos y el surgimiento de los espacios del miedo y de la violencia. En síntesis, la pérdida del derecho a la ciudad: la exclusión, des-democratización y des-ciudadanización.

El territorio de Caracas no es uno sino múltiple; podría hablarse de territorios políticos, el chavista por un lado y el de la oposición por el otro, donde la tarea de identificar la localización de las actividades urbanas es de índole no sólo geográfica sino también clasista. El territorio chavista es el de las barriadas pobres localizadas en las cuatro márgenes cardinales de la ciudad como lo apuntaba el periodista Taynem Hernández<sup>20</sup> y es el espacio donde los índices de violencia urbana son mayores dada la falta de vigilancia y control policial. Su ubicación marginal se vuelve estratégica a la hora de los conflictos porque en este territorio se pueden cerrar (aislar) las murallas y puertas de acceso a la ciudad y a sus actividades tal como ocurría con las murallas de la Edad Media<sup>21</sup>.

El recorrido por los territorios chavistas y de la oposición que incluye las barriadas pobres, las afluentes urbanizaciones de clase media y los espacios públicos que ambos comparten, la observación crítica sobre la clase social de los peatones que se desplazan por las calles, plazas y avenidas de Caracas y, finalmente, el análisis de las características físicas del espacio y la naturaleza de las actividades que en estos espacios se realizan, mostrará: una ciudad sitiada, con rejas, alambrado eléctrico, casillas de vigilancia y hasta barricadas en las casas, edificaciones, calles y urbanizaciones para salvaguardar la propiedad privada de la clase media y alta; donde los ciudadanos no se

19. La democracia participativa, término que quedó inscrito en la Constitución Bolivariana de 1999 y que sirvió de objetivo a las luchas ciudadanas que lideraron las asociaciones de vecinos en los años setenta y ochenta, es un término sumamente amplio y ambiguo que en la actualidad es utilizado por las dos partes en conflicto como respaldo de sus luchas.

20. *El Universal*, domingo 22 de diciembre del 2002, pp. 1-7.

21. Un ejemplo de ello fue el intento del Grupo Carapica o Tupamaros de cerrar la Avenida Sucre cercana a la populosa Urbanización del 23 de enero y con ello la salida hacia el puerto y el aeropuerto de la ciudad. Otro posible ejemplo fue cuando bajó la población de las barriadas populares el 11 de abril del 2002 a apoyar al presidente destituido con motivo del golpe de Estado desatándose saqueos y una gran violencia urbana que dejó más muertos que los eventos que condujeron al golpe. En esta oportunidad, la clase media permaneció recluida en sus viviendas.

identifican o apropián de los espacios públicos los cuales están deteriorados y son inseguros; donde muchos espacios públicos han sido privatizados reduciendo la ciudad del ciudadano; donde las calles y espacios de circulación peatonal han sido apropiados por los comerciantes informales no para cuidarlos sino para transformarlos a un uso económico. En suma, mostrará una ciudad donde los procesos de segregación socioespacial se han exacerbado como consecuencia de la creciente polarización social y donde los conflictos políticos se han territorializado (García-Guadilla, 1998; Rodríguez y Winchester, 2000; García y Villá, 2001).

Caracas, ciudad que en el pasado se asumía como un ejemplo de «la convivencia de los barrios marginales con las modernas urbanizaciones de clase media» y de «una sociedad de clases sin lucha de clases», es hoy una ciudad dividida y polarizada socialmente y altamente segregada desde el punto de vista espacial y de desempeño de las actividades. Los espacios de convivencia social se han homogeneizado de forma polarizada y segregada dividiéndose en «espacios de los pobres y espacios de la clase media»; esta polarización tiende a coincidir con los espacios de quienes apoyan al presidente Chávez y aquellos que se le oponen. Es así que en Caracas se han reproducido las «áreas naturales» del Chicago de 1920, entendidas éstas como áreas territoriales homogéneas en términos socioeconómicos.

Según los escritos de la ya famosa Escuela de Chicago (Park y Burgess, 1925), a comienzos del siglo XX, en esta ciudad las pandillas juveniles se dividían el territorio y quien osara entrar en el territorio del otro era fuertemente reprimido. Sin embargo, los factores que ocasionaban estos conflictos eran fundamentalmente étnico-raciales ya que la composición socioeconómica de las áreas en conflicto (fueran éstas negras, polacas o italianas) era semejante puesto que todos eran pobres. Por tanto, el conflicto entre grupos étnicos tenía que ver más con la defensa y/o apropiación de un espacio o territorio que con diferencias políticas o sociales. En contraste, el desencadenante de los conflictos espaciales en la Caracas del 2003 es fundamentalmente de carácter político; es decir, de apoyo o el rechazo al presidente Chávez. No obstante, estas diferencias políticas tienden a vincularse con diferencias de clase social al asociarse con los estereotipos alimentados por el propio presidente de la República quien ha equiparado la división política con división de clase, ha plasmado su definición de pueblo exclusivamente en los pobres y ha alienado a la clase media estereotipándola de «oligarca». A pesar de las diferencias políticas y sociales, los chavistas y la oposición coinciden en la forma de plasmar estas diferencias de forma segregada en el territorio que ocupan y sobre todo en «excluir al otro» de dicho territorio. Es así como Caracas ha pasado a ser una ciudad donde se dan fuertes confrontaciones de clase: si se es pobre se tiende a ser chavista y si se tiene algo que perder (clases media y alta) se opta por la oposición política.

Al informar sobre la Marcha por la Paz realizada por los motorizados del sector popular de Catia en Caracas, el diario *El Nacional* del 23 de febrero del 2003 (p. A-2), destacó que ésta «...desacató la caprichosa zonificación que con base en patrones políticos se le ha hecho a la ciudad de Caracas y cuya violación puede ser penada con una golpiza o una lluvia de piedras». Uno de los integrantes de la Coordinadora de Catia

auspiciadora del evento, resaltó que los habitantes de la zona están perdiendo el miedo a pesar que «...por aquí nos tienen intimidados. Ellos (los oficialistas) consideran que este territorio es su cuna y por eso lo cuidan»<sup>22</sup>. En la evaluación final de esta marcha por la paz se señala que la caravana volvió a su base sin bajas a pesar de que «desafiaron la regla no escrita, a merced de la cual alguien con boina roja corre peligro en Altamira y otro con "pinta de escuálido" debe andar con sigilo en Casalta»<sup>23</sup>.

Las trangresiones a los espacios del otro pueden ocasionar no sólo «heridos por golpiza o piedras» sino también «muertos»<sup>24</sup>. Por ejemplo, el 11 de abril del 2002, fecha en que la oposición decidió llevar su protesta al Palacio de Miraflores o sede del Ejecutivo ubicado en el centro de la ciudad y en territorio chavista, hubo numerosos muertos. También hubo dos adeptos al chavismo muertos con motivo de los intentos de la marcha de la oposición por llegar al emblemático Paseo de Los Próceres el día 6 de enero del 2003; un policía metropolitano murió el 23 de febrero del 2003 por traspassar la frontera de adeptos al chavismo instalados frente al edificio de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la Urbanización La Campiña. Esta violencia contra el otro se intensifica en los espacios que han sido apropiados según las diferencias políticas (adептo a Chávez *versus* oposición) frente al «desdibujado e incrementalista proyecto bolivariano» que cada día, según sea la coyuntura política, parece delinearse de una manera distinta.

Sin embargo, dentro de este territorio urbano polarizado por la violencia política, el espacio «propio» tampoco garantiza la seguridad o integridad física como lo demuestran las muertes en la Plaza Altamira ocurridas el 6 de diciembre del 2002. Por otro lado, la expresión de esta violencia en espacios segregados políticamente tiene una vinculación estrecha con las diferencias socioeconómicas por lo que la ciudad de Caracas ha tendido a polarizarse socialmente a la manera de un gueto enfrentando, desde el punto de vista político y social, a la clase media y alta que vive predominantemente en el sector Este de la ciudad con la población pobre que tiende a vivir en el Oeste<sup>25</sup>. Esta relativa coincidencia entre las diferencias políticas y sociales estimula los estereotipos y marca cada vez en mayor grado el espacio urbano y las percepciones que cada uno

22. Ver *El Nacional*, 23/2/2003, p. A/2.

23. Ver *El Nacional*, 23/2/2003, p. A/2.

24. Es preciso destacar que no puede emitirse ningún juicio sobre si la responsabilidad por la violencia política es de los chavistas, la oposición, la policía, la Guardia Nacional u otra instancia ya que no se han llevado a cabo las investigaciones judiciales pertinentes lo que hace que una parte culpabilice a la otra por los «muertos». La Comisión de la Verdad, solicitada por la sociedad civil y avalada por organismos internacionales de Derechos Humanos con motivo de los numerosos muertos del 11 de abril del 2002, no se llegó a instalar al no conseguir la aprobación de la Asamblea Nacional, mayoritariamente adeptos al presidente Chávez, que obstaculizó tal posibilidad. A pesar de la falta de credibilidad acerca de su objetividad, la Asamblea Nacional creó su propia Comisión para investigar las muertes del 11 de abril.

25. Ni la segregación espacial ni la polarización social es total ya que también existen pobres en el Este como el caso de la Parroquia Petare en el Municipio Sucre del Este de la ciudad o de urbanizaciones como El Paraíso y Montalbán que son de clase media-media o media-baja y que están ubicadas en el Oeste.

tiene del otro delimitando de este modo los ámbitos de la ciudad donde se puede circular con relativa seguridad.

El recorrido de la cotidianidad de Caracas que se sugiere realizar mostrará la faceta antidemocrática de los procesos socioespaciales y políticos que están emergiendo en Caracas y que se expresan en espacios del miedo y en ciudadanías de guerra que alientan procesos de des-ciudadanización. Si se toma en cuenta que dichos procesos se vinculan con los distintos imaginarios sociales, los cuales tal como se señaló, tienden a estar asociados con una posición de clase social, el recorrido mostrará la cara de una ciudad dividida en geografías sociales estrechamente asociadas con la defensa de los estilos de vida de cada clase social. Para evitar la violencia urbana, es preciso conocer este mapa ideológico-social y político de manera de no traspasar sus límites o fronteras.

Todavía los habitantes de Caracas, orgullosos de su caraqueñidad, otrora símbolo de modernidad frente al resto de las ciudades del país se preguntan: ¿cómo se llegó a esta polarización social en Caracas, ciudad que si bien no tiene en su haber méritos urbanísticos sí podía jactarse de contar con una población aparentemente integrada socialmente y donde, según algunos estudiosos (Naim y Piñango) «existían las clases sociales pero no lucha de clases»?; ¿una ciudad donde el conserje del edificio o el limpiabotas conversaban amigablemente con el propietario o el cliente?; ¿una ciudad donde en la mejor tradición caribeña, los habitantes de los barrios marginales coexistían, en buenos términos relativamente hablando, con los de las edificaciones de clase media e incluso con los habitantes de zonas residenciales de clase alta en cuyas casas trabajaban?; ¿una ciudad donde si bien existía segregación espacial, la segregación social generalmente consecuente en otras ciudades de América Latina sobre todo aquellas con un alto porcentaje de población indígena, estaba minimizada?

La violencia y el miedo al otro junto con la politización de la sociedad civil y de los espacios de la ciudad donde ésta se expresa<sup>26</sup> se acentuaron en 1999, una década más tarde del «Caracazo» incidiendo en el deterioro de la calidad de vida, movilizando a las organizaciones sociales y plasmándose tanto en los espacios públicos como privados.

26. Si bien la violencia y la inseguridad urbana están estrechamente asociadas con los elevados niveles de pobreza y desigualdad, estos problemas se recrudecen como consecuencia de los procesos aquí descritos. Por otro lado, la politización de los espacios de la ciudad o el uso de los mismos para las protestas no es un fenómeno nuevo ya que desde la época de la Colonia las plazas y calles han servido para que la gente reclame sus derechos en momentos de crisis políticas o económicas tal como ocurrió con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958 o como ya se ha señalado, en el «Caracazo» de 1989. Sin embargo, el fenómeno que aquí describimos es novedoso en la intensidad, duración, dispersión y variedad de espacios que se utilizan. También en el hecho de que los espacios quedan «marcados» o identificados políticamente y, en ocasiones, cambian sus usos, permanentemente o por un tiempo relativamente largo como en el caso de Puente Llaguno, sede de los grupos organizados chavistas o la Plaza Altamira, sede de los militares opositores a Chávez. Finalmente, en este trabajo se enfatiza el caso de Caracas por ser la expresión más intensa de este proceso pero los mismos procesos estuvieron presentes en otras ciudades grandes de Venezuela tales como Maracaibo, Valencia o Barquisimeto.

La oposición ha expresado su protesta mediante cacerolazos, pitazos y apagones de luz que realizan desde las calles o desde el espacio privado de los ya sea lujosos o humildes apartamentos que habitan en edificios residenciales de las urbanizaciones de clase media; el cambio de luces y el uso de banderas desplegadas en los vehículos, balcones y otros lugares a manera de estandartes, y mediante las innumerables marchas que este grupo social organiza en las calles, plazas, avenidas, autopistas y otras áreas públicas de la ciudad. Los adeptos al gobierno, cuya organización el imaginario de las clases media y alta ha tendido a identificar con los Círculos Bolivarianos<sup>27</sup>, se han movilizado en apoyo al presidente Chávez o han dirigido sus protestas contra los grupos opositores mediante el asedio a edificaciones públicas vinculadas con la oposición como por ejemplo los medios de comunicación que tienen un alto valor simbólico porque construyen la opinión pública política. Los adeptos a Chávez también asediaron las oficinas administrativas de las organizaciones corporativistas que lideraban el conflicto como la CTV y Fedecámaras, las oficinas de las filiales petroleras (PDVSA) y la sede de la Alcaldía Metropolitana donde el alcalde era opositor a Chávez. Más aún, obstaculizaron las actividades urbanas mediante mitines y movilizaciones de calle semejantes a las de la oposición y en el caso del gobierno, interfirieron la dinámica de la ciudad instalando grandes mercados populares en las principales vías públicas como en el caso del bulevar José María Vargas en pleno corazón de Caracas y los «gaitazos» o las fiestas populares organizadas por el gobierno en los bulevares o plazas públicas para apoyar al régimen.

Como consecuencia de la espacialización en la ciudad de Caracas de las expresiones políticas a favor o en contra del presidente Chávez, la función de la calle, la plaza o la autopista se ha transformado, e incluso, la identidad de muchos de estos espacios ha cambiado de forma permanente. Tal como lo señaló Túlio Hernández en su columna dominical<sup>28</sup>:

Que la plaza Bolívar, ese símbolo de la centralidad urbana, heredado del esquema original de la ciudad ibérica, haya sido convertida en la sede operativa de un grupo de violentos oficialistas, con el aplauso del propio alcalde del Municipio Libertador, y en zona vedada para los opositores, lo menos que puede considerarse es una triste y atractiva aberración.

Igual ocurre con el territorio tomado en La Campiña. Allí, con el pretexto de tener instalada una zona de seguridad (de nuevo la gramática de guerra) para defender PDVSA de

27. Es preciso destacar que no todos los adeptos forman parte de los Círculos Bolivarianos a pesar de que los medios de comunicación privados, mayoritariamente en manos de la oposición, así los han estereotipado. De hecho, estos medios han estereotipado a la oposición con la sociedad civil y a los adeptos al gobierno con los círculos. También debe mencionarse que entre los adeptos a Chávez existe un grupo de la clase media que se autodenomina «clase media en positivo» en un intento por diferenciarse no sólo de la clase media de la oposición sino también de los Círculos Bolivarianos y de los «chavistas estereotipados», en general.

28. Ver *El Nacional*, 9/3/2003.

sus enemigos escuálidos, opera día y noche un ruidoso templete chavista que cuenta con el aditivo de una carpa convertida en burdel a precios regulados, la cual tiene sometida a la más profunda indignación y molestia a los vecinos de la zona.

Lo mismo vale para la plaza Altamira. El que en otros tiempos fuera uno de los pocos lugares de generoso esparcimiento con los que cuenta esa zona caraqueña ha quedado convertido en territorio militar de oposición, en cuartel al aire libre, en casa de partido con paredes, en urbanidad secuestrada para sólo un grupo de los ciudadanos que usan la ciudad. Porque allí, como ocurre en la plaza Bolívar o en los alrededores de La Campiña, los demás y las opciones personales han quedado vedados. Ya no pueden ir las parejas a compartir tranquilas, ni los niños a jugar o los ancianos a conversar, como antes. Hoy sólo se va a hacer política y sólo si se es de ese tipo particular de oposición que celebra y persigue la salida militar (p. A/13).

Acciones como el cerramiento de las calles y autopistas denominados «trancazos»<sup>29</sup> o las frecuentes y masivas concentraciones y marchas que impiden también la circulación vehicular se han vuelto cada vez más frecuentes. De este modo, la calle ya no sirve solamente para la convivencia ciudadana y para que circulen los peatones en su ruta hacia las actividades cotidianas pues está ocupada en días laborales por los comerciantes ambulantes o buhoneros que han crecido prodigiosamente a la luz de la crisis económica o por las personas que se movilizan para «manifestar o marchar». La autopista ya no sirve sólo para que circulen los vehículos<sup>30</sup> sino que puede estar cerrada para el tránsito vehicular por la multitud de gente que acude a marchar, a favor o en contra del régimen, por los «trancazos» de la vía hechos por la oposición, por los mercados populares o por las expresiones recreativas e incluso religiosas<sup>31</sup> que se instalan en ocasiones especiales que así lo decide el gobierno o la oposición.

29. La práctica del «trancazo» supuso el levantamiento de barreras u obstáculos para impedir la circulación de los vehículos en calles, avenidas y autopistas seleccionadas y, de acuerdo con determinados horarios, incluso dentro de la propia urbanización, fue llevada a cabo durante el denominado «paro cívico» de la oposición en los meses de diciembre del 2002 y enero del 2003 y generó gran tensión y un alto rechazo entre los vecinos de las urbanizaciones de clase media que eran los más afectados por la medida al trancarse unos a otros. Esta acción que cercenaba el derecho constitucional a transitar libremente por las calles, avenidas o autopistas de la ciudad fue suspendida cuando una encuesta de los medios de comunicación destacó su alta impopularidad.

30. Es de hacer notar que el caraqueño no puede desprendérse de su vehículo como parte de la cultura urbana de clase media a lo que contribuye el hecho de que la expansión de la ciudad de Caracas y, sobre todo, la construcción de las modernas y periféricas urbanizaciones de la clase media, no ha tomado en cuenta al peatón y que el sistema de transporte público es altamente deficitario.

31. Un ejemplo de expresión recreativa que cercena el derecho al libre tránsito a pesar de que su objetivo era el intercambio o entendimiento entre los dos grupos en conflicto, fue el juego de pelota entre chavistas y oposición en plena autopista de Prados del Este a la altura de la urbanización Santa Fe y el barrio el Guire; otro ejemplo, en este caso de expresión religiosa, fue la misa a la Virgen que se realizó en la misma autopista. Ambas actividades fueron realizadas durante la huelga de la oposición, en los meses de diciembre del 2002 y enero del 2003.

Aun cuando hemos puesto como ejemplo la ciudad de Caracas donde las tensiones democracia-antidemocracia y/o ciudadanización-desciudadanización aparentemente se encuentran exacerbadas, estas dos facetas también se expresan en algunas de las ciudades del interior del país; sobre todo en los lugares de producción petrolera, principal actividad económica de Venezuela. La espacialización de los conflictos trasciende el espacio urbano y se expresa a nivel del sistema de ciudades siendo las de mayor tamaño las que tienen los mayores conflictos y a nivel de las regiones siendo aquellas regiones donde se encuentran instaladas las industrias básicas del Estado tales como petróleo y aluminio, las más conflictivas.

Tal como lo señaló Antonio Cova Maduro<sup>32</sup> con motivo del paro petrolero que respaldó al denominado por la oposición «paro cívico nacional»:

Por ser una acción que forma parte de una movilización política, el paro petrolero no puede ser desligado de ella. Se nutren recíprocamente. Es ello lo que ha hecho que zonas hasta ahora aparentemente marginales a la agitación, como la costa oriental del Lago de Maracaibo, la península de Paraguaná y los estados Anzoátegui y Monagas sean, con Caracas, los grandes motores de la resistencia a Hugo Chávez (pp. 1-8).

En lo que se refiere a la defensa de su estilo de vida (tradúzcase, intereses de clase), Cova Maduro señala:

Para que eso sea posible (que se ensamblen adecuadamente el vasto conjunto de operaciones y programas de la red petrolera) es vital que se cumpla con... el mantenimiento y cuidado de la util *red informal* en la que deviene cualquier organización con el correr de los años. Las ciudades-petróleo como Cabimas, Lagunillas, Anaco y San Tomé refuerzan esa tendencia hasta unos niveles increíbles. Atacarles su modo de trabajo es agredirles brutalmente su modo de vida<sup>33</sup>.

La existencia de estos espacios políticos o de conflicto aumenta la probabilidad de que en ellos se ejerza la violencia en caso que el «otro» intente traspasarlos. Otra de las expresiones antidemocráticas de la territorialización de los conflictos la constituyen las movilizaciones cívicas o marchas dentro de espacios que excluyen al «otro». Cada grupo, sea a favor o en contra de Chávez, tiene sus hitos y sus recorridos bien marcados no permitiendo que «el otro» se desplace en estos espacios: cuando uno de estos grupos intenta entrar en el territorio del otro ocurren fuertes enfrentamientos incluso físicos. Los espacios marcados por estas expresiones sociopolíticas dentro de la elevada polarización social e ideológica existente tienden a desdibujar su función urbana original, si no de forma permanente al menos en los momentos en que el conflicto político se activa y se instala en ellos: las autopistas no sirven para que circulen los vehículos en ruta a las actividades cotidianas sino para realizar manifestaciones multitudinarias, hacer vigencias (con tienda de campaña y los enseres de un moderno *camping*) o albergar a las

32. Ver *El Universal*, domingo 22 de diciembre del 2002, pp. 1-8.

33. En *El Universal*, domingo 22 de diciembre del 2002, pp. 1-8.

miles de personas en ruta a apoyar o rechazar el régimen; las plazas tampoco sirven para el descanso y la recreación pasiva sino para expresar el apoyo o el rechazo político al presidente. Los jóvenes de la clase media que en el pasado siguieron los hábitos norteamericanos de recreación son los primeros en reforzar esta nueva subcultura que incluye no sólo las marchas sino también la vestimenta que se utiliza para asistir a la misma con colores de la bandera nacional, la música del folclor nacional que las anima y los símbolos y pancartas de sabor nacionalista. El incremento de las relaciones sociales cara a cara y el surgimiento de un espíritu de solidaridad entre iguales socialmente son también parte de esta subcultura de las marchas<sup>34</sup>.

La subcultura «patriótica y nacionalista» que emergió a lo largo de estos conflictos en la clase media opositora también difiere de la de la clase pobre en lo que se refiere a la apropiación de los hitos y símbolos espaciales urbanos tradicionales y modernos. En una sociedad fuertemente dividida en clases sociales, los símbolos patrios tradicionales como la Plaza Bolívar en el centro de la ciudad, el Panteón Nacional donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, el Palacio Presidencial de Miraflores, la Asamblea Nacional y el Paseo Los Próceres entre otros han sido apropiados por el sector que apoya al gobierno. Este territorio que no le pertenece a la clase media según los chavistas tiene un elevado valor simbólico y patriótico; dentro del imaginario quizás no consciente de los adeptos a Chávez se encuentra la idea de que «sólo los chavistas son los dueños de esos símbolos». También se enfrentan lo tradicional y lo moderno dentro de estos espacios simbólicos ya que la Plaza Altamira, las autopistas Francisco Fajardo y Prados del Este y los espacios públicos contiguos a las grandes edificaciones como la sede de PDVSA en Chuao, que son los espacios de protesta de las clases media y alta, representan los símbolos de la moderna cultura petrolera.

## VI. ¿DES-DEMOCRATIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CIUDADANOS?: PLANES COMUNITARIOS DE DEFENSA ACTIVA DEL 23 DE ENERO DEL 2003

Dentro del proceso de segregación espacial y polarización social causado por las diferencias políticas se observa la transformación de las organizaciones de vecinos y ciudadanos que durante los ochenta lucharon por la profundización de la democracia y

34. Las marchas van acompañadas de los comerciantes ambulantes o buhoneros que venden todo tipo de símbolos patrios (banderas, sombreros y vestimentas con los colores de la bandera nacional) requeridos para asumir el papel de oposición y alimentar esta subcultura. Estos comerciantes informales también satisfacen todo tipo de necesidades alimenticias llegándose al límite durante el paro cívico de diciembre del 2002 a febrero del 2003, de acompañar las marchas con grandes ollas para calentar la tradicional «hallaca navideña». Sin embargo, los vendedores ambulantes o «buhoneros» no son percibidos como «iguales» sino como «el otro» con quien se establece una relación desigual de vendedor-consumidor; en momentos en que se desata la violencia, los buhoneros pueden ser tildados de sospechosos y en algunos casos como en los eventos de la Plaza Altamira ocurridos en 2003, uno de los buhoneros que regularmente venden en ella fue casi linchado por la oposición a pesar de su inocencia debido a los estereotipos de clase.

la participación en asuntos locales (Santana, 1988; Gómez Calcaño, 1987; Garrido y Ramos, 1994; Ramos, 1995) en comunidades seudomilitarizadas de defensa e incluso armadas para «protegerse del otro», el enemigo. Un ejemplo de ello lo constituyen los planes de contingencia o de guerra que se prepararon con motivo del 23 de enero del 2003. Dichos planes fueron una consecuencia del rumor de que «las hordas chavistas y los Círculos Bolivarianos» supuestamente invadirían las residencias de las clases media y alta el 23 de enero en pleno paro cívico, el cual casi duraba dos meses.

Algunos de los militares retirados que intentaron liderar la oposición a Chávez sembraron fuertes rumores que retumbaron en los espacios privados u hogares de la oposición sobre la invasión que supuestamente los Círculos Bolivarianos Chavistas realizarían al sagrado recinto de las residencias de la clase media. La hora cero sería el día 23 de enero del 2003, fecha en que se conmemora el inicio de la democracia o la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Los diagnósticos o partes de guerra presentados por algunos de estos militares de la oposición indicaban que ese día habría una terrible violencia de parte de los Círculos Bolivarianos y que la única forma de contrarrestarla sería con tácticas de guerra. Como parte de esta estrategia, un grupo de militares retirados, muchos de los cuales estaban vinculados laboralmente con empresas de seguridad, se alió con los representantes de las comunidades de vecinos de clase media y diseñaron el «Plan Comunitario Defensa Activa»<sup>35</sup> el cual fue distribuido a través de losvecinosobservan@hotmail.com para ser aplicado en las residencias particulares, edificaciones y urbanizaciones de clase media. En la «Introducción (Versión Terrorismo)» (p. 3) del documento se destaca su objetivo:

Este es un material desarrollado por un grupo de vecinos *con el consenso y participación de comunidades amigas y especialistas en el área de seguridad comunitaria*, con la finalidad de establecer lineamientos operativos que nos permitan aumentar la efectividad de respuesta al enfrentar situaciones de emergencia que pudieran presentarse en nuestras viviendas, institutos escolares o trabajos (p. 3) (resaltado nuestro).

Los planes que eran muy semejantes entre sí incluían el uso de las armas «por si acaso», pues es preciso destacar que en los últimos meses, no sólo los Círculos Bolivarianos parecían haberse armado sino también la clase media<sup>36</sup>. En palabras de uno

35. Ver <http://www.segured.com>.

36. Los planes de contingencia contemplaban varios niveles: la edificación o el condominio, la urbanización y el sector más amplio de urbanizaciones. Por lo general incluían: un plan de comunicación y alertas de diferente tipo a través de radios, pitos, sirenas, teléfonos celulares, ruidos, etc.; un plan para «levantar el puente», es decir, obstruir el acceso a la edificación y/o urbanización mediante barricadas de hierro o atravesando camionetas o carros como obstáculos; un plan para el cerramiento interno de las puertas de los edificios y de acceso a las escaleras incluyendo la inmovilización del ascensor en los pisos superiores; un plan de ataque al invasor a través del derramamiento de agua o aceite caliente y, en caso de que todo fallara, el plan contemplaba que las mujeres, los ancianos y los niños se retirarían a espacios resguardados y los hombres utilizarían las armas (testimonios recibidos por la autora entre cuarenta participantes en estos planes de diferentes urbanizaciones).

de los entrevistados de la oposición, la diferencia es «que la clase media se ha armado para defender los sagrados derechos a la propiedad, familia y libertad mientras que los chavistas lo hacen para atacar dichos derechos». La versión desde los adeptos a Chávez es que ellos «no están armados» y que también «defienden sus derechos». Estos planes de defensa, más adecuados para fortificaciones sitiadas al mejor estilo de la Edad Media que para modernas edificaciones urbanas, incluían el uso de armas, el cerramiento con candados internos de las rejas y puertas de los edificios, el derramamiento de barriles de aceite y de agua caliente sobre el agresor, la construcción de barricadas y la elaboración de bombas molotov entre otras cosas. En el mismo se destaca textualmente que se:

...puede implementar el uso de aceite, gasolina, cadenas, clavos o barreras con carros, camiones o autobuses, barriles, materos, desperdicios, botellas quebradas, destapar las tapas del drenaje y alcantarillas, para evitar o retrasar el acceso a la zona (p. 16).

El Plan de Defensa Activa también implicaba la vigilancia nocturna y por turnos de los propios residentes pues en la mayoría de los casos no se confiaba ni en el servicio doméstico ni en los vigilantes privados quienes pertenecen a la clase pobre y normalmente custodian la entrada de las edificaciones<sup>37</sup>. A este respecto el Plan Comunitario de Defensa Activa señalaba:

No sea tan confiado con los empleados domésticos específicamente los que vienen por días. Recuerde que muchas de estas personas han sido manipuladas y algunas nos comienzan a ver como enemigos. Esto es un asunto delicado y no hay por qué generalizar... pero debe estar alerta ante cualquier evidencia (p. 17).

Dicho Plan recomendaba «estar preparado para cualquier contingencia que pueda ocurrir» (p. 1), la activación de un sistema de alertas que iba del verde al rojo, de un sistema de comunicación altamente sofisticado para comunicarse con las policías locales, con los medios de comunicación y con los vecinos. La mayoría de las urbanizaciones reforzaron el número de vigilantes (paradójicamente pertenecientes a la clase pobre), se construyeron barricadas y se estuvo alerta durante toda la noche. Nada ocurrió pero las amas de casa, los niños y la población de clase media en general percibió que el pobre era el «enemigo» mientras que el pobre percibió que el oligarca, la clase media o los «escuálidos» como los llamó el presidente Chávez, eran el enemigo.

La Alianza Cívica de la Sociedad Civil conformada por las organizaciones ciudadanas *Queremos Elegir*, *Nulidad 1011* y *Ciudadanía Activa*, emitió un documento con

37. Al igual que con los servicios domésticos y los comerciantes informales, el vigilante tiende a ser considerado en el imaginario de las clases media y alta como «el otro»; no como un igual debido a su condición de clase. La expectativa de la clase media que normalmente contrata a los vigilantes privados para custodiar sus residencias era que en caso de ocurrir tal invasión, éstos saldrían corriendo en lugar de permanecer para defender las propiedades de «otros». En algunos casos, incluso, se les asoció con el enemigo por ser pobres y se les tildaba de «chavistas».

recomendaciones sobre previsiones básicas en cada hogar vinculadas con alimentos, agua, energía, salud, documentos y dinero en caso de una *Perturbación Natural o Social* cuya complejidad fue clasificada en cinco niveles o escenarios: *Conmoción Social, Intervención Militar, Sin Garantías, Circunstancias Extremas y El Colmo*. En el documento se señalaba que los escenarios previsibles eran el de *Perturbación Natural (N)* producto de un fenómeno natural para el cual había que estar preparado y el de *Conmoción Social (S1)* que se refiere a la existencia de «disturbios masivos o situación de emergencia general. Incluye movilización o confrontación militar, pero en principio no tiene a organizaciones como la nuestra señaladas» (p. 2). El «estar preparados para lo peor» (p. 4) significaba tomar previsiones básicas en cada hogar en lo referente a «contar con reservas de alimentos y productos para largos períodos sin abastecimiento», energía, coccina e iluminación, salud y primeros auxilios, documentos y dinero. En lo que concierne al uso de «armas para la defensa» se señala textualmente lo siguiente:

Nunca se sabe cuándo algún tipo de arma puede servir para la defensa del hogar. Bates, trozos de cabilla, machetes o cuchillos de gran tamaño y hasta armas de fuego pueden ser útiles, siempre que se sepa utilizarlas y se tenga la decisión de hacerlo en defensa propia, que no se vaya a dudar en el momento clave y que se conozcan los riesgos legales de su uso (p. 6).

## VII. CONSTRUYENDO CIUDADANÍAS PLURALES FRENTE A LA POLARIZACIÓN: ALGUNOS INTERROGANTES

En los años noventa, la grave crisis política y económica junto con la cooptación por parte de los desprestigiados partidos políticos del movimiento ciudadano de clase media que por casi dos décadas lideró las movilizaciones a favor de la democracia participativa, contribuyeron a vaciar el espacio desde el cual construir las ciudadanías diferenciadas, complejas y plurales que requiere la democracia participativa. Con la incorporación de nuevos mecanismos de participación en la Constitución Bolivariana, se sentaron las bases para una democracia más pluralista capaz de albergar los valores, concepciones y rationalidades propuestos por las organizaciones y movimientos sociales, los cuales no estaban incluidos en la Constitución de 1961. La institucionalización o inclusión en la Constitución de 1999 de las demandas de estos actores introdujo nuevos interrogantes acerca de la autonomía, articulación con el Estado y articulación entre las propias organizaciones sociales.

En primer lugar, la sociedad civil venezolana actual ha perdido el pluralismo ideológico y el policlasismo que la caracterizaron en los períodos pre y constituyente y se ha dividido. Por tanto, la sociedad civil no es un Sujeto único; en su interior se confrontan dos proyectos de sociedad divergentes y, probablemente, antagónicos que pretenden ser hegemónicos y que la han llevado a dividirse de forma polarizada con base en criterios de clase social. Por otro lado, el nuevo marco constitucional no ha podido transformar la cultura política ni contrarrestar las percepciones negativas sobre «el otro»

e incluso las autopercepciones que derivan de las diferencias socioeconómicas. Los elevados niveles de pobreza y las profundas desigualdades que existen dentro de un escenario polarizado social y políticamente han contribuido a la emergencia de un imaginario social acerca del «otro» altamente excluyente por parte de las organizaciones sociales que en el pasado lideraron el movimiento ciudadano a favor de la democracia participativa, el pluralismo y la autonomía de los políticos. Ello ha traído como consecuencia comportamientos y prácticas de exclusión y negación basados en el miedo al «otro» a quien se considera como el enemigo, que contradicen los requisitos de la sociedad civil ética y explican las confrontaciones entre los dos sectores de la sociedad civil y entre el gobierno y el sector de la oposición.

Una vez elegido el presidente Chávez en 1998 y aprobada la Carta Magna donde se sancionó la democracia participativa y se incluyeron las demandas y derechos de las organizaciones sociales previamente excluidas, las organizaciones sociales tendieron a politizarse y diferenciarse ideológicamente en organizaciones a favor del proyecto bolivariano de Chávez y organizaciones en contra de tal proyecto. Adicionalmente, las organizaciones de la oposición parecen haber encarnado en el presidente Chávez las causas de la crisis. A todo ello debe sumarse la crisis de ciudadanía que ha dificultado la delimitación entre los espacios público y privado, los intereses particulares y colectivos y los ámbitos de lo político y lo social.

Por otro lado, el vacío dejado por la falta de actores sociales autónomos y por el des prestigio de los partidos o actores políticos tradicionales ha llevado a transgresiones en el rol que le corresponde desempeñar a cada uno de los actores para salir de la profunda crisis. Con frecuencia, los actores o partidos políticos se disfrazan de organizaciones no gubernamentales o fundaciones y las organizaciones sociales usurpan, aunque sea momentáneamente, el papel de los partidos políticos. Estas transgresiones se ven facilitadas por la no existencia de un proyecto sociopolítico claro que permita delimitar claramente los roles que le corresponden a cada actor. El interrogante que se des prende del dilema anterior es si estas organizaciones sociales serán capaces o no de desplegar estrategias no democráticas para hacer valer sus valores e intereses de clase.

Los imaginarios de exclusión desplegados a lo largo de los conflictos analizados, los cuales fueron esgrimidos en nombre de la democracia que las organizaciones sociales decían defender, lleva a interrogarse acerca de la existencia de una cultura ciudadana y de un movimiento social urbano tal como se planteó durante los años ochenta y noventa. Lleva también a interrogarse acerca de si es posible la existencia de un movimiento ciudadano autónomo que traspase las barreras de clase social en ausencia de una cultura cívica y en presencia de grandes desigualdades sociales y polarización política.

Por tanto, una pregunta importante es si se puede avanzar la democracia en situaciones de alta polarización, baja institucionalidad, déficit de cultura política democrática, elevada desigualdad, alta polarización de clases que conlleva diferentes visiones sobre tal institucionalidad, falta de un proyecto alternativo e incluyente de ciudadanía capaz de nuclear no sólo a la oposición sino también a los adeptos a Chávez y trasgredión de roles entre los actores económicos y sociales.

Una última interrogante clave que queda planteada de cara a la construcción de futuros escenarios es: ¿cómo construir democráticamente la Voluntad General dentro del escenario polarizado que hoy tenemos en Venezuela? Dada la existencia de grandes desigualdades sociales y la elevada polarización política que existen en este periodo, el reto más importante es la reconstrucción de una sociedad civil «ética. Para ello, es preciso tomar en cuenta que el comportamiento de las organizaciones sociales que se han analizado es más una consecuencia que la causa de la fragmentación, polarización y confrontación entre los distintos sectores de la sociedad civil y entre uno de estos sectores y el Estado. Si la sociedad civil no es democrática es porque el imaginario democrático se ha trastocado y si está dividida es porque no existe un proyecto de sociedad incluyente. Esta falta de proyectos incluyentes representa una ruptura con el comportamiento del pasado. En consecuencia, dentro de la polarización existente, las acciones colectivas apuestan a una salida que en todo caso sería transitoria porque hoy en día no puede haber articulación por la resignificación de la democracia si no existen intereses comunes y un proyecto de sociedad incluyente.

La naturaleza de la crisis también requiere reconceptualizar lo político y regresar a los objetivos e identidades propias de los actores de manera de definir el rol que les corresponde jugar. Finalmente, la construcción de ciudadanía entendida como una práctica conflictiva y de poder que refleje la lucha por la definición colectiva de los problemas y sus soluciones y que reconozca la diversidad existente y dé cuenta de ella en la arena política, debe ser hecha desde la práctica. Por lo tanto, la lucha por la democratización de la democracia exige la utilización de medios democráticos y una orientación hacia fines colectivos lo que supone una mayor inclusión en los asuntos de interés colectivo y nuevas prácticas de organización y representación social. A lo largo de este proceso de construcción de ciudadanía, es preciso no olvidar lo que destacan algunos autores; es decir, que uno de los riesgos de la democracia participativa a la hora de su instrumentación es que puede perfeccionar los espacios de participación y los procedimientos sin vehicular valores colectivos o de la sociedad y puede promover los derechos de la ciudadanía mediante prácticas autoritarias y excluyentes.

### VIII. BIBLIOGRAFÍA

CUNIL GRAU, Nuria. *Participación ciudadana: dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados Latinoamericanos*. Caracas: CLAD, 1991.

DE CERTEAU, Michel. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley, Los Angeles-Londres: University of California Press, 1984.

ELLNER, Steve. Obstáculos a la consolidación del movimiento vecinal venezolano: la brecha entre lo nacional y lo local. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 1999, vol. 5, n.º 1: 33-57.

GARCÍA-GUADILLA, María Pilar. Ajuste económico, des-democratización y procesos de privatización de los espacios públicos en Venezuela. *Revista Interamericana de Planificación*, 1998, vol. XXX, n.º 119 y 120: 77-89.

- Actores, organizaciones y movimientos sociales en la Venezuela del 2002. En RAMOS ROLLÓN, Marisa (ed.). *Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.

- Sociedad civil: institucionalización, fragmentación, autonomía. En ELLNER, Steve y HELLINGER, Daniel (eds.). *La Política en la Época de Chávez: Clases, Polarización y Conflicto*. Nueva Sociedad, 2003, pp. 231-251.
- The Democratization of Democracy and Social Organizations of the Opposition: Theoretical Certainties, Myths, and Praxis. *Latin American Perspectives*, 2005, Issue 141, vol. 32, n.º 2: 109-123.
- La sociedad civil venezolana (1961-2004): Institucionalización de nuevas ciudadanías y luchas por la democracia. En *Una Lectura Sociológica de la Venezuela actual*. Caracas: Ediciones Universidad Católica Andrés Bello, 2005a, pp. 84-120.

GARCÍA-GUADILLA, María Pilar y ROA, Ernesto. Gobernabilidad, cambio político y sociedad civil: el proceso constituyente en Venezuela. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 1996, vol. 2, n.º 2-3: 85-112.

- La red de organizaciones sociales liberales y la democracia en Venezuela. *Revista Cuadernos del Cendes*, 1997, año 14, n.º 35: 55-80.

GARCÍA-GUADILLA, María Pilar y SILVA, Nadeska. De los movimientos sociales a las redes organizacionales en Venezuela: estrategias, valores e identidades. *Revista Politeia*, 1999, n.º 23: 7-28.

GARCÍA, Pedro José y VILLA, Marc. De la sociabilidad vigilante a la urbanidad privativa. *Perfiles Latinoamericanos*, 2001, año 10, n.º 19: 57-82.

GARRIDO, Francisco Javier y RAMOS, Marisa. Tejido asociativo y organización comunitaria en Caracas. En VILLASANTE, Tomás (coord.). *Las ciudades hablan*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1994.

GÓMEZ CALCAÑO, Luis. *Crisis y movimientos sociales en Venezuela*. Caracas: Edit. Trópicos, 1987.

- Nuevos actores y viejas prácticas: asociaciones de vecinos y partidos políticos. En *49 Congreso Mundial de Americanistas*. Quito, 1997.

KLIKSBERG, Bernardo. América Latina: Una región en riesgo. Pobreza e inequidad. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*, 2002, vol. VIII, n.º 1: 9-22.

LANDER, Edgardo. Movimientos sociales urbanos, sociedad civil y nuevas formas de ciudadanía. En LANDER, Edgardo (ed.). *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia: Ensayos sobre América Latina y Venezuela*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1995.

NAIM, Moisés y PIÑANGO, Ramón. *El caso Venezuela: una ilusión de armonía*. Caracas: IESA, 1984.

PARK, Robert y BURGESS, Ernest. *The City*. Chicago: University of Chicago Press, 1925.

RAMOS, Marisa. *De las protestas a las propuestas: identidad, acción y relevancia política del movimiento vecinal en Venezuela*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1995.

REY, Juan Carlos. *El futuro de la democracia en Venezuela*. Serie Estudios, Colección Idea, Caracas, 1989.

RODRÍGUEZ, Alfredo y WINCHESTER, Lucy. *Ciudades y gobernabilidad en América Latina*. Colección Estudios urbanos. Santiago: Ediciones Sur, 1998.

ROTKER, Susana. *Ciudadanías del miedo*. Caracas: Rutgers-Nueva Sociedad, 2002.

SANTANA, Elías. La política de los vecinos: experiencias del Movimiento Comunitario como fuerza democrática y de cambio frente a la crisis. En *El Venezolano ante la crisis*. Caracas: Ediciones Amón C.A. Instituto IDEA, 1988.